

Las etapas de la valorización financiera y el rol del sindicalismo argentino

Por Nazareno Bravo y Ernesto Espeche

Resumen

El golpe de Estado de 1976 interrumpió el modelo sustitutivo de importaciones y transformó el comportamiento económico y social del último cuarto de siglo.

Este escenario de predominio de la especulación sobre la producción -profundizado en democracia- potenció la concentración del capital, y trajo aparejado un alto nivel de exclusión social.

La continuidad de este modelo en democracia, exigió una articulación entre sistema político y valorización financiera.

La situación del sindicalismo y el rol que jugó su principal Confederación, muestran las formas de disciplinamiento o cooptación que sufrió el movimiento obrero argentino y las estrategias elegidas por sus dirigentes.

Abstract

The state coup of 1976 interrupted the substitute model of imports and transformed the economic and social behavior of the last quarter of the century.

These stage of predominance of the speculation over the production –gone deeply in democracy- increased the capital concentration and brought a very high level of social exclusion.

The continuity of this model in democracy, demanded an articulation between the political system and the financial values.

The situation of the union and the role that the principal Confederation played, showed the forms of discipline supported by the Argentine workers movement and the strategies chosen by their leaders.

Introducción

La dictadura militar que irrumpió en 1976 comenzó a transformar el andamiaje económico y social que regía el funcionamiento de la sociedad argentina. Hasta entonces, la producción industrial era el eje del desarrollo y existía una alianza policlasista entre los trabajadores y el capital, sustentada en la convicción de la importancia que tenía el consumo de las clases populares para la dinámica económica.

El modelo sustitutivo de importaciones, con sus variantes internas, estaba vigente desde la década del treinta y promovía una industria orientada hacia el mercado interno con un significativo grado de concentración económica. En este marco predominaba el capital extranjero, con una fuerte incidencia entre las grandes empresas y un ritmo acelerado de crecimiento. Eran tiempos en los que el trabajador industrial se consolidó como el núcleo central de la clase trabajadora y el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario, eran los centros industriales del país.

El golpe de Estado interrumpió el modelo sustitutivo de importaciones y comenzó a afianzar la valorización financiera, cambió drásticamente el comportamiento económico y social del último cuarto de siglo en Argentina. Esto representó una enorme rentabilidad, obtenida desde entonces por el sistema financiero en general, y la multiplicación de las rentas de capitales oligopólicos, líderes en las restantes actividades económicas.

Este escenario de predominio de la especulación financiera sobre la producción y el trabajo -profundizado en democracia- marginó del mercado a las pequeñas y medianas empresas, potenció la concentración del capital, lo que puede evidenciarse en el carácter regresivo de la distribución del ingreso y en el muy alto nivel de exclusión social que se evidencia a partir de los 90. Todo ello se tradujo en cifras alarmantes de desocupación, pobreza y marginalidad sin antecedentes en nuestro país.

La continuidad de este modelo económico en democracia, a partir de 1983, exigió una articulación entre el sistema político y la valorización financiera. En este contexto intentaremos describir la situación y el papel del sindicalismo -especialmente la CGT-, entendido como organización representante de la clase obrera y por tanto, actor principal de la política argentina. Sus distintas reacciones y reestructuraciones, al calor de las estrategias políticas elegidas por sus líderes,

llevaron al movimiento obrero a pasar por diferentes realidades. A su vez, la pérdida constante de fuentes de trabajo, la flexibilización laboral y la baja credibilidad, obligaron al sindicalismo a plantearse nuevos desafíos para mantener su poder.

A fin de adentrarnos en el análisis del modo de acumulación vigente desde la última dictadura, y detenernos en sus implicancias políticas y sociales, vamos a seguir el ordenamiento que propone Eduardo Basualdo en el que se distinguen tres etapas que articularán nuestro recorrido (Basualdo, E., 2002: 29). Una primera etapa corresponde a la dictadura militar (1976 -1983). Con ella se instauro un nuevo patrón de acumulación a partir del terrorismo de Estado. El gobierno de Alfonsín (1983-1989) abarca la segunda etapa, marcada por la ampliación del proceso de acumulación, centrado en el eje de la integración «pacífica» y la negociación con el sindicalismo. Finalmente, los dos gobiernos menemistas (1989-1995 y 1995-1999) y el aliancista (1999-2001) se inscriben en la tercera etapa, cuando se profundiza el predominio de la valorización financiera mediante la incorporación de fuerzas políticas - aún las contestatarias - al sistema de dominación.

Entendemos que el sindicalismo, como cualquier otro tipo de organización social, no se mantuvo estático sino que sufrió transformaciones importantes en las etapas que analizamos. Intentamos vislumbrar el grado de *disciplinamiento / cooptación* – comprendidas como formas de neutralizar una acción opositora - del sindicalismo argentino a partir de 1976. A partir de aquí, ensayaremos respuestas tendientes a interpretar este fenómeno.

Efectivamente, en democracia, la opción de los sectores dominantes para consolidar el nuevo patrón de acumulación, consistió en una estrategia que no utilizó principalmente medios represivos. Para impedir la organización de las bases y evitar el surgimiento de fuerzas alternativas que cuestionaran el orden económico, se apeló a un proceso de integración de las conducciones políticas y sociales de los sectores populares. Así, fueron cooptados cuadros políticos, dirigentes sindicales, etc., que promovieron, en muchos casos, la inmovilización social de quienes debían representar.

Para analizar las distintas estrategias por las que optaron los sindicatos, ante la profundización de las transformaciones económicas durante los noventa, seguiremos la clasificación presentada por M. Victoria Murillo en su trabajo sobre

el sindicalismo durante el menemismo (Murillo, M.,1997:419s). Las mismas pueden agruparse en tres categorías: «*Resistencia*», «*Subordinación*» y «*Supervivencia Adaptativa*».

1. La dictadura: cambio del patrón de acumulación capitalista al compás del terrorismo de Estado

1.1. Apertura económica, endeudamiento y valorización financiera

Si bien los cambios económicos implementados a partir de la última dictadura militar (1976–1983) se enmarcaron en las condiciones internacionales dominantes en la economía mundial, cabe señalar que, como advierte Rodolfo Puiggrós: «*las causas externas intervienen en los cambios sociales por intermedio de las causas internas*»¹. Más allá de que los países centrales impulsaran políticas tendientes al cambio en el patrón de acumulación, fue determinante la voluntad expresa y activa de los sectores dominantes locales. Quizás sea por eso que apareció en Argentina, como rasgo distintivo, un notable grado de exacerbación para impulsar la valorización financiera a partir de la represión, como elemento central de disciplinamiento.

La apertura del mercado de bienes y capitales se conjugó con la Reforma Financiera de 1977, marcando el inicio del predominio del nuevo modelo. A partir de allí los productos importados erosionaron, vía precios, la producción interna e irrumpió el fenómeno del endeudamiento externo, no sólo del sector público, sino también del capital oligopólico, que incrementó la deuda del sector privado, que luego sería estatizada. Cabe señalar – y esto es central en la valorización financiera- que las grandes empresas no se endeudaron para realizar inversiones productivas, sino para obtener renta mediante colocaciones financieras. Así, los grandes capitales especulaban con las elevadas tasas de interés locales respecto de las internacionales y luego fugaban los recursos al exterior para reiniciar el ciclo.

El papel del Estado en este proceso fue clave. Primero, porque a través del endeudamiento interno mantuvo elevadísimas tasas de interés en el mercado financiero local. Segundo, porque, mediante la deuda externa, proveyó las divisas necesarias para la fuga de capitales. Finalmente, como dijimos, porque asumió como propia la deuda del sector privado.

1 Citado en Basualdo, Eduardo. *Sistema político y modelo de acumulación*, 2002, p30.

Claro está que los grandes afectados por la valorización financiera fueron los trabajadores, golpeados por una brutal redistribución del ingreso. Pero también se perjudicó a una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, ya que el capital se concentró fuertemente en un número reducido de grandes grupos económicos locales y extranjeros, además de la banca local y acreedora.

Al respecto, señala Basualdo: «*la política económica de la dictadura alteró la sociedad existente, pues detuvo abruptamente el crecimiento industrial y modificó la estructura del sector y el comportamiento de firmas líderes*» (Basualdo, E., 1992:7). El resultado es el asentamiento de las bases para el predominio de la valorización financiera y la fuga de capitales y la desindustrialización y el endeudamiento externo. A su vez, descendió el salario real y quedaron sin efecto numerosas conquistas laborales.

1.2. Represión y disciplinamiento del movimiento obrero

Previo al golpe, la Confederación General del Trabajo (CGT) había logrado un alto grado de concentración de poder a partir de leyes que articularon el modelo sindical argentino (CGT única, sindicato único por actividad, convenios colectivos y control de obras sociales). Si bien la mayor parte de estas leyes fueron sancionadas en los dos primeros gobiernos peronistas, fue en el período 73/76 cuando alcanzó su máxima expresión. Por esto, una de las primeras medidas del gobierno de facto fue ordenar la intervención de la CGT y los principales sindicatos, poner fin a las negociaciones colectivas de trabajo, prohibir las huelgas y desatar una sistemática persecución, que incluyó el encarcelamiento y la desaparición de dirigentes y militantes sindicales y sociales. Este panorama se completó con otras medidas tendientes a la represión de la libre actividad sindical: suspensión de fueros sindicales, intervención de obras sociales, modificación de la legislación de contratos de trabajo, etc. (Canitrot, A., 1980: 455).

Si bien no todos los sindicatos fueron intervenidos, la prohibición de las actividades fundamentales de cualquier organización obrera y la limitación a ciertos trámites burocráticos, imposibilitó de hecho cualquier tipo de oposición. A ello debe agregarse las actitudes cómplices con la dictadura de un número importante de sindicalistas, que dando la espalda a los trabajadores, colaboraron en la confección de «listas negras» de militantes políticos y fueron actores importantes en la red de relaciones tejida por los militares. A pesar de esto, durante los primeros años de la dictadura se produjeron huelgas sectoriales «heroicas» -si tenemos en cuenta lo fulminante de la represión- de los trabajadores de empresas

automovilísticas, así como de los gremios metalúrgicos y portuarios. En 1977 un conflicto con el sindicato de Luz y Fuerza, que incluyó la primera movilización callejera desde el golpe, terminó con el secuestro y posterior desaparición del dirigente Oscar Smith. Según un informe elevado a la OIT, entre 1976 y 1978 se habrían llevado a cabo más de 110 huelgas de distinta intensidad en todo el país. Esta cifra se elevó a 170 para abril de 1979. En este año se declaró la primera huelga general convocada por los líderes moderados.

La correcta interpretación de la coyuntura debe comprender la evaluación del contexto en el que se produjeron tales conflictos, caracterizado por un gran retroceso del movimiento obrero, que se expresó en la falta de articulación de las medidas de fuerza y la precariedad de las posibilidades organizativas. En marzo de 1982 la CGT, de la mano de Saúl Ubaldini, convocó a un paro de actividades a nivel nacional, en reclamo de la normalización de los sindicatos. La represión a esta protesta, que tuvo un alto grado de aceptación, dejó como saldo el asesinato en manos de la policía del sindicalista Benedicto Ortiz, en Mendoza.

Finalmente, debemos agregar que las grandes reformas llevadas adelante por el gobierno de facto, tendientes a configurar un nuevo escenario económico, habrían sido imposibles sin la previa «limpieza» y posterior desmovilización de la clase trabajadora. Si bien la dictadura no logró todos sus objetivos en el aspecto económico, sí lo hizo respecto al «trabajo sucio» de barrer con cualquier tipo de oposición e instauró anti-valores: individualismo, falta de compromiso y participación, etc.-. Ello permitió completar las metas económicas pendientes durante los gobiernos democráticos que les siguieron. En la persecución, encarcelamiento y aniquilamiento de buena parte de los cuadros políticos que hacían posible la organización y movilización de los sectores populares, encontramos el «aporte» fundamental que hizo la dictadura a la consolidación de los sectores dominantes. En este sentido, podemos asegurar que en esta primera etapa analizada, la situación del sindicalismo se caracterizó por el disciplinamiento generalizado de sus cuadros y la subsistencia limitada en las cúpulas de representantes que, poco tiempo después, configurarían el sindicalismo «oficial».

Analizaremos sus características en el siguiente apartado, pero podemos adelantar que su rasgo fundamental fue la pérdida del carácter clasista o transformador, que había caracterizado a una buena parte del que existió antes del golpe (Canitrot, A., 1980: p458).

2. Gobierno radical: la profundización del modelo

2.1. Crisis de endeudamiento e hiperinflación

Durante la década del ochenta se profundizó en el país la valorización financiera. El proceso económico fue conducido entonces, por grupos económicos locales, conglomerados extranjeros y bancos acreedores que, como venía sucediendo, se basaron en la sobreexplotación de los trabajadores y en la férrea subordinación del Estado a sus intereses particulares.

Desde 1982 se inició en la región la etapa conocida como la «crisis de la deuda externa». Se trató de un periodo caracterizado por la escasez de financiamiento externo. En este contexto, nuestro país osciló por esos años entre el estancamiento y la crisis económica, con serias restricciones en la formación de capitales producto de su fuga al exterior.

El conjunto de los sectores dominantes experimentó por entonces un gran crecimiento basado en una favorable redistribución del ingreso, que fue posible por varios factores:

- reducción de ingresos de los asalariados.
- carácter crecientemente regresivo en el sistema impositivo.
- orientación de las transferencias estatales.

Pero al interior del establishment, los distintos sectores dominantes participaron de manera diferente de los recursos sustraídos a los trabajadores. En efecto, en una etapa signada por la falta de financiamiento internacional, predominaron los grupos económicos y algunos conglomerados extranjeros en detrimento de los acreedores externos.

En su diagnóstico inicial, el gobierno alfonsinista incurrió en errores de interpretación económica. Se pensó que durante la dictadura militar se había agravado la restricción externa de la economía debido a un vertiginoso crecimiento de la deuda externa, pero que no se habían producido reformas estructurales y que la economía nacional seguía respondiendo al funcionamiento típico de la segunda etapa de la sustitución de importaciones. Acordamos con Jose Nun cuando afirma que *«el equipo técnico radical buscó refugio en viejas certezas y confió en soluciones anacrónicas y en un voluntarismo ingenuo»* (Nun, J., 1987:84-85).

A partir de esta concepción, en los primeros años del gobierno democrático, la política económica apuntó a una renegociación con los organismos internacionales de crédito. Fracasado este intento y efectuado el cambio ministerial (Bernardo Grinspun fue reemplazado por Juan Sourrouille), cambió el sentido de la política pero se mantuvo el mismo error inicial de interpretación: despliegue de un modelo exportador y reactivación de la inversión. Esta iniciativa desconoció la importancia que tenía en el deterioro de la economía, la fuga de capitales al exterior.

A lo largo de esta gestión se producen algunos agrupamientos entre la CGT y empresas vinculadas a la industria, el agro, el comercio y la construcción. Estos acuerdos, que en un momento tuvieron relación con el rechazo de las políticas gubernamentales, se dieron también en contextos de crecimiento del capital concentrado local y extranjero y, por tanto, del acceso de éstos al control de entidades empresariales que más tarde generaron nuevas convergencias con altos funcionarios del partido gobernante. Las discusiones y los acuerdos en estos encuentros no se limitaron a cuestiones de política económica, sino también a temas netamente políticos.

La estrategia del empresariado giró en dos frentes: plantear exigencias mediante los acuerdos entre organizaciones empresariales y negociar directamente con el partido de gobierno sus intereses específicos. De este modo, el capital concentrado mantuvo las prebendas obtenidas durante la dictadura (promoción industrial, transferencia de deuda al Estado, etc.) y logró algunas nuevas, vinculadas con incentivos a las exportaciones.

A partir de estas experiencias comenzaron a articularse sectores del partido gobernante con integrantes de los sectores dominantes, poniéndose en marcha un proceso de cooptación ideológica y de negocios políticos y económicos. Los operadores políticos absorbidos por los sectores dominantes no se desjerarquizaron en su nueva función, por el contrario, se ubicaron en posiciones decisivas en la vida partidaria.

Los últimos dos años del alfonsinismo resultaron claves para entender el fenómeno hiperinflacionario. A partir de 1987 cambió drásticamente aquel diagnóstico inicial erróneo. Se explicitó que ni las tendencias inflacionarias ni los obstáculos al crecimiento eran fenómenos aislados o productos únicamente del sector externo de la economía y que el culpable era el modelo «populista y estatista».

La salida oficial pasaba entonces por la reestructuración del Estado mediante la privatización de empresas públicas y la apuesta a una política aperturista importadora. Sin embargo, el tímido plan privatizador lanzado en 1988 fue rechazado en el Congreso Nacional por la oposición justicialista (de la Balze, F., 1983: 63).

Los sectores del bloque dominante, hasta entonces postergados por las políticas iniciales del radicalismo, comenzaron a jugar un papel protagónico. Los acreedores externos fueron en adelante los grandes beneficiarios, fortalecidos luego de que en 1985, en una reunión del FMI en Seúl, se puso en marcha el Plan Baker, se lanzó el plan de grandes reformas estructurales en los Estados de los países deudores².

La presión de los operadores de los organismos internacionales chocó con la fuerte influencia de los grupos económicos locales, el capital extranjero y la oposición justicialista. Las reformas estructurales encontraron, provisoriamente, un freno en nuestro país, mientras que el gobierno había suspendido por entonces los pagos de las obligaciones vinculadas con la deuda externa. El escenario internacional se complicó con la llegada de George Bush (padre) al gobierno norteamericano y la exigencia de su gestión de normalizar pagos y reformas estructurales.

En este contexto, la banca extranjera presionó con la «*corrida*» cambiaria de febrero de 1989, desatando el proceso hiperinflacionario que terminaría con el Gobierno de Alfonsín, y condicionaría durante muchos años el comportamiento político argentino. Fue claramente una crisis - producto de las pujas en el bloque dominante - apuntada a remover las restricciones estructurales que impedían el avance del desarrollo de la valorización financiera vigente desde la última dictadura.

2.2. El fortalecimiento de las cúpulas sindicales

En junio de 1983, con la sanción de la ley 22839, se normalizó la actividad de la CGT y los sindicatos volvieron al ruedo político (Murillo, M., 1997: 421). Aunque diezmados, adquirieron un rol importante de la mano de una oposición sistemática

2 Entendiendo que no existían posibilidades concretas de hacer frente al pago de intereses y capitales de las deudas por parte de los países subdesarrollados, se propuso entonces el rescate de bonos de la deuda externa a cambio de activos físicos. Este es el origen de los procesos privatizadores de empresa públicas en los países latinoamericanos y la génesis del cambio de la política del gobierno radical en su etapa final.

al gobierno radical.

Es importante recordar que este sindicalismo no es el mismo que sufrió las persecuciones y prohibiciones durante la dictadura. Sin lugar a dudas, lo que emergió fue una Confederación en la que se encontraron las vertientes que resultaban aceptables para un sector importante del establishment, y que se disponían ahora a lograr sus objetivos políticos y económicos (muy vinculados al Partido Justicialista).

Si bien el rol del líder sindical Lorenzo Miguel, en la derrota del Justicialismo frente a Alfonsín (pacto sindical-militar) parece haber sido fundamental -por lo que sufrió el vacío político de parte importante de la estructura partidaria y la consiguiente pérdida de influencia en las decisiones políticas internas-, a partir de la cerrada oposición a las políticas radicales, logró recuperar aliados en la arena política.

En el año 1984, Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley de Reordenamiento sindical, que establecía el control de las elecciones por parte del Estado y buscó desmontar la estructura sindical peronista. La ley fue aprobada en Diputados y posteriormente rechazada en Senadores -de mayoría justicialista- lo que provocó la primera renuncia en el gabinete de Alfonsín. La inmediata respuesta de los sindicatos se tradujo en la reunificación (que se mantendría hasta el año 1989) de la CGT bajo la conducción de Saúl Ubaldini, quien condujo con éxito trece paros nacionales³. Esta estrategia de confrontación permanente con el gobierno, le abrió a Ubaldini un gran espacio y lo posicionó como uno de los principales actores políticos del momento.

Durante 1987, el Gobierno intentó llegar a un acuerdo con el sindicalismo, que se tradujo en la incorporación a la cartera de Trabajo del ex sindicalista Carlos Alderete, quien reestableció las normas que daban un amplio margen de poder a la CGT (similar al período 1973-1976).

Otros datos interesantes para la comprensión de esta etapa son los que proceden del análisis de las transformaciones producidas al interior de la CGT. Si

3 Una evaluación de los trece paros nacionales permite establecer que si bien contaron con acatamiento sindical importante, el poder de movilización de la central obrera fue mermando: en el 2° paro nacional (1985) se nuclearon más de 200.000 personas, mientras que en el 10° la cifra rondó las 15.000. (Fraga, R. 1991:17)

bien se mantuvo el predominio peronista en los grandes gremios, se produjo una importante pérdida del peso relativo de los gremios industriales en detrimento de los de servicios. Se advirtieron cambios en las conducciones de gremios chicos y medianos y la incorporación a la CGT de agrupamientos de trabajadores que no lo habían hecho anteriormente: docentes, graduados universitarios y gremios jerárquicos.

Un factor determinante en la nueva configuración del sindicalismo argentino, que se acentuó con el paso de los años, se vislumbró en el análisis de los conflictos laborales a partir de la segunda mitad de 1987: los gremios del sector público (que representan un tercio de los trabajadores) llevaron a cabo las dos terceras partes de las medidas de fuerza. Esto se explica, por un lado, por la caída del poder adquisitivo del sector, y por otro, por la «*posibilidad*» de hacerlas debido a estatutos que respetaban el derecho a huelga, a diferencia de lo que ocurría con los trabajadores privados.

Puede asegurarse que, durante la presidencia radical, el sindicalismo, moldeado a partir del *disciplinamiento*, retomó parte del poder del que había sido privado, merced a que consiguió estructurarse como eje de la oposición contra los intentos gubernamentales de minar su poderío y aplicar las reformas económicas que finalmente serían llevadas adelante por Menem. Debe entenderse esto, como la última demostración de resistencia a gran escala del sindicalismo argentino, si bien cabe aclarar que puede ser entendida como funcional a la estrategia del PJ. De todas maneras esta resistencia no descartó la negociación e implicó acuerdos con el Poder Ejecutivo, que tuvieron como resultado la modificación o suspensión de proyectos de ley e inclusive, la incorporación al Ministerio de Trabajo de un gremialista.

Finalmente comenzaron a percibirse notorios cambios internos, que se harían más visibles en la siguiente etapa y que desembocarían en divisiones y nacimientos de nuevas centrales de trabajadores.

3. Los gobiernos menemistas y aliancista: profundización de tendencias

3.1. Reforma del Estado y pauperización

El nuevo gobierno asumió anticipadamente el poder, el 14 de mayo de 1989 y lo hizo justo en el momento de mayor contradicción, desde el comienzo de la valorización financiera, entre el capital concentrado y los acreedores externos.

A estas alturas la transformación de la estructura económica y social argentina estaba consolidada, aunque comenzaron a reagruparse voces disidentes que luego formarían el Frente Grande. Esta conformación amenazó el bipartidismo que en los años previos fue paulatinamente cooptado por la clase dominante. Era la posibilidad de una tercera fuerza política en crecimiento, fuertemente cuestionadora del modelo vigente de acumulación.

El bipartidismo argentino se componía de una fuerza dominante (PJ) y una fuerza auxiliar (UCR), a la hora de llevar adelante las transformaciones económicas. La potencialidad de una tercera fuerza política antimodelo y con aspiraciones de poder, se derrumbó cuando el FREPASO se integró con la UCR (1998).

Con el establishment en fuerte disputa y una crisis económica y social sin precedentes, llegó al gobierno la Alianza en 1999, con la fórmula Fernando De la Rúa- Carlos *Chacho* Álvarez. Los errores estratégicos de los dirigentes de la fuerza emergente hicieron que no se produjera un cambio de rumbo sino que, por el contrario, las políticas neoliberales continuaran. Esto se tradujo en desencanto social y retroceso en la búsqueda de fuerzas políticas capaces de motorizar cambios estructurales en beneficio de los sectores populares. La Alianza gobernó según los intereses de la clase dominante y convocó a personajes identificados con el modelo que se pretendía cambiar.

Durante este lapso se acentuó la disputa entre sectores dominantes. Los sucesivos cambios en el Ministerio de Economía (desde José Luis Machinea hasta la vuelta de Domingo Cavallo) respondieron a esta pugna. Hasta la caída de De la Rúa, el establishment discutía dos proyectos alternativos a la Convertibilidad, que expresaban las profundas divergencias que existían en su seno.

El proyecto vinculado con los capitales extranjeros tenía por objetivo la dolarización, presentada como la etapa superior de la Convertibilidad. Aspiraba a garantizar el mantenimiento del valor en dólares a quienes tenían sus activos fijos en el país, y a evitar se acrecentaran las deudas del sector financiero.

El otro proyecto, «pseudo - nacional», vinculado a los grupos locales y a algunos conglomerados extranjeros, proponía la devaluación y la implementación de subsidios estatales para sus bienes exportables con ventajas comparativas naturales. Se agruparon tras este proyecto sectores de la burocracia sindical, la iglesia y entidades empresariales.